

PLIEGO

Vida Nueva
2.968. 12-18
DICIEMBRE DE 2015

ELECCIONES

ELECCIONES

**Un cristiano,
un voto**

RAÚL GONZÁLEZ FABRE
Universidad Pontificia Comillas. Madrid

Demografía, separación de poderes, trabajo, cohesión social, solidaridad... son algunos de los aspectos de la vida de un país que resultan decisivos cuando la ciudadanía acude a las urnas. Someter a examen estas cuestiones, a pocos días de las elecciones generales, no solo nos permitirá entender mejor dónde, cómo y cuándo se juega nuestro futuro, sino que nos ayudará a decidir el voto desde una perspectiva cristiana.

En vísperas de las elecciones generales vamos a recontar algunos aspectos relevantes, desde el punto de vista cristiano, a la hora de decidir el voto. Hemos elegido temas especialmente queridos para el pensamiento social de la Iglesia y, al mismo tiempo, centrados en la vida interna del país, puesto que se trata de elecciones generales.

Desde luego, no haremos ninguna recomendación, directa ni indirecta, de en qué sentido votar. Al revés, con un poco de (mala) suerte, al cruzar la oferta electoral de los grandes partidos con el pensamiento cristiano obtendremos un conjunto vacío. No parecerá raro; desde el mismo **Jesús**, el cristianismo tiene algo de intrínsecamente contracultural. Cuando se vuelve cultura compartida, sociología, tiende a adulterarse; en cuanto conduce al Calvario, nos acerca a Dios, no importa cuán poca cosa seamos.

Organizaremos el material en un texto principal con puntos a nuestro entender cruciales, y una serie de recuadros con aspectos más de procedimiento para decidir el voto desde una perspectiva cristiana.

LA DEFINICIÓN DEL SUJETO Y LA DEMOGRAFÍA

La pirámide poblacional española es más bien un “botijo” cuyo máximo se sitúa en la franja cercana a los 40 años, como puede verse en el gráfico adjunto, tomado de una publicación oficial reciente.

Ello incluye a los extranjeros, cuyos niños, nacidos aquí o afuera, explican la pequeña recuperación en la base de la pirámide, que no se espera duradera.

Una pirámide poblacional así amenaza a todo el sistema que hemos

llamado “Estado del bienestar”: una proporción mayor de personas mayores recibirán más pensiones de jubilación y requerirán más servicios médicos públicos. Una cohorte máxima de entre 40 y 60 años significa un paro más difícil de reabsorber, porque las empresas contratan con más facilidad antes de los 40 años que después. Y un número decreciente de jóvenes y niños irán vaciando las aulas. Dado que el sistema público de educación tiene muy difícil redimensionarse a la baja, la tendencia a reducir el presupuesto de educación tomará la vía de reducir los conciertos, lo que ya hemos empezado a ver en el ciclo superior de la FP.

Puede pensarse en tres caminos de salida para este callejón en que se está metiendo nuestra sociedad:

1. Mantener la estructura del Estado del bienestar, pero disminuir sus prestaciones conforme menos personas coticen y más reciban sus servicios (lo que ya ha empezado a

hacerse en la actualización de las pensiones, con las listas de espera en la sanidad pública y en los copagos de las medicinas, por ejemplo).

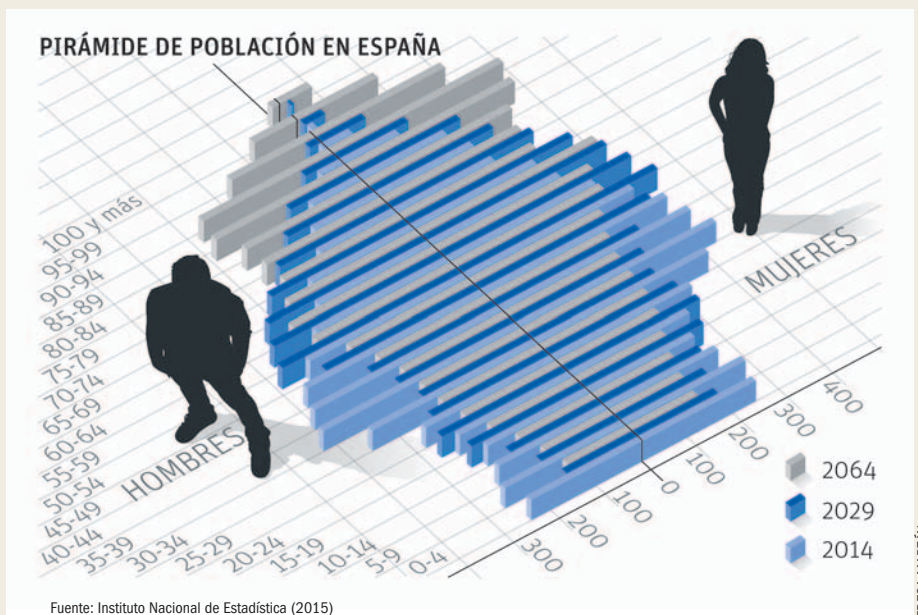
2. Cambiar la estructura del Estado del bienestar, fundándolo no en la solidaridad intergeneracional (los trabajadores activos financian lo que reciben quienes ya se han jubilado), sino en el ahorro público forzado del trabajador (de manera que cada cual, finalmente, reciba lo que ahorró durante su vida laboral).

3. Aplicar una política orgánica de protección de las familias y de migraciones exteriores, que permita aumentar la base de la pirámide poblacional con trabajadores jóvenes.

Las tres políticas son compatibles, y probablemente alguna combinación de ellas sea lo más sabio. Desde el punto de vista cristiano, está claro que la tercera no debería faltar. Una pregunta pertinente para cualquier programa de gobierno es: ¿qué piensa usted hacer para que las mujeres jóvenes puedan trabajar y, al mismo tiempo, criar todos los hijos que deseen?

El sentido común indica, además, que el coste no puede recaer directamente sobre las empresas (que perderían entonces competitividad contratando mujeres jóvenes), sino que debe ser asumido por la sociedad a través de los impuestos (ya que todos nos beneficiamos mucho de que haya niños en nuestra sociedad).

Además del impacto sobre el Estado del bienestar, que acabamos de





Mariano Rajoy, candidato del PP

esbozar, en la cuestión demográfica se juega un asunto más importante de principios, de justicia: quién es una persona en nuestra sociedad y, por tanto, quién tiene derecho a protección legal contra la muerte provocada. Si uno considera que la persona empieza a existir con la concepción y termina con la muerte natural, entonces ni el aborto ni la eutanasia son aceptables. Todos aquellos actos que consistan en una muerte realizada o inducida por otro deberán ser considerados como homicidios.

La razón de base no es solo teológica, sino también filosófica. Las cosas pueden ser evaluadas por su utilidad, pero las personas poseen una dignidad inalienable, que permanece por más molestas que nos resulten dichas personas. La única manera moralmente justificable de cargarse a la abuela, o a un feto o a alguien con una minusvalía grave consiste en declarar que no es una persona, sino una cosa. Si es una persona, entonces matarla constituirá homicidio desde el punto de vista moral, y deberá ser prevenido y evitado en lo posible, legalmente, como los demás homicidios.

Aunque en nuestro entorno esa posición parece ser defendida solo por creyentes, no se apoya en una doctrina religiosa, sino en una concepción racional de la persona. Lo menos que se le puede pedir a un programa político es que conceda espacio en la discusión pública a este asunto: quién debe ser protegido como ciudadano. Si un programa político no se propone que tal discusión exista o no pretende que sea racional, sino que la enfoca como un asunto de propaganda y manejo de la opinión pública, está eludiendo un punto decisivo para la convivencia en sociedad.

LA LIBERTAD POLÍTICA Y LA SEPARACIÓN DE PODERES

La democracia no consiste solo en el mecanismo electoral y en el cumplimiento de la ley, sino que forma parte de su esencia la separación de poderes y el control mutuo entre estos. En la versión original de la idea, la de Montesquieu, se trata de la separación de los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial; de forma que pueda establecerse un sistema equilibrado entre instituciones independientes, donde cada una verifica que las otras se mantienen dentro de la ley. Ningún poder público debería pasar por encima de la ley y del control de los otros.

En una idea más completa, no solo es importante la separación de los poderes dentro del Estado, sino de todos los poderes operantes, incluyendo los sociales: las grandes empresas, las asociaciones empresariales y los sindicatos, los partidos, los medios de comunicación, las Iglesias, etc. La idea es semejante, pero al incluir organizaciones

privadas postula, además, que ninguna de ellas cobre fuerza suficiente para hacer una ley civil a su medida que le permita eludir la competencia económica o política.

La democracia constituye un sistema inestable, incluso en los países desarrollados donde parece muy consolidada. Su principal enemigo, sin embargo, no es la dictadura, sino la oligarquía. La oligarquía consiste en que unos pocos grandes poderes se pongan de acuerdo para actuar conjuntamente con el fin no solo de quebrar la ley escapando a controles y consecuencias, sino de hacer nuevas leyes que pongan de su lado el poder del Estado y afiancen su posición de predominio sobre la sociedad.

En España se observan una serie de rasgos patentes de oligarquización: el control político del poder judicial; la formación de clientelas en torno a los gobiernos autonómicos, a los municipales y a los sindicatos; la ley electoral, que cierra camino a la expresión de las minorías; la connivencia obvia entre políticos y grandes empresas; la oligopolización de sectores económicos enteros; las asociaciones de intereses entre empresas comunicacionales y partidos políticos; la corrupción en las obras públicas en algunas regiones y municipios...

La democracia española está degradándose. Todos los electores –con más razón, los cristianos– deberían preguntar a cada partido cómo piensa hacer para volver a separar los poderes en el Estado y en

Principios y consecuencias

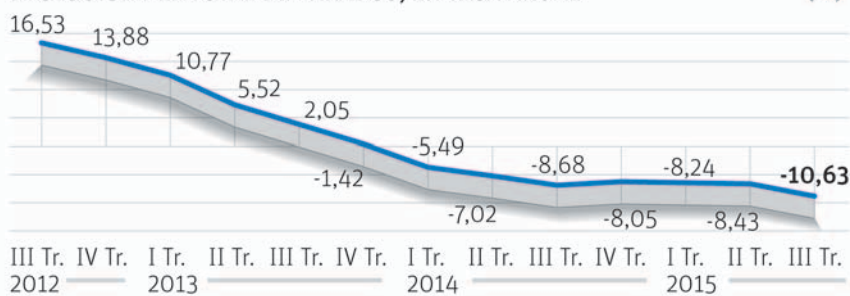
El voto es un asunto esencialmente moral: no de la ética individual, que se refiere a la forma en que cada persona decide vivir y se va constituyendo así en quien quiere ser; sino que pertenece a la parte más colectiva de lo que queremos ser como conjunto, como sociedad. La tradición cristiana, al menos desde Tomás de Aquino, ha enfatizado que en las decisiones políticas

debe buscarse un equilibrio entre principios realizados y consecuencias esperables. Ninguno de los dos aspectos tiene prioridad absoluta sobre el otro. Una decisión basada en buenos principios, pero que resulta en malas consecuencias o que ignora el mejor saber disponible sobre las consecuencias, es una decisión imprudente. Y una decisión imprudente no es buena.

Una decisión que solo mide las consecuencias prácticas, pero no los principios, fácilmente comete injusticia hacia algunos para obtener mejores resultados de conjunto. Una decisión injusta tampoco es buena. El punto es, pues, alcanzar el mejor equilibrio posible entre principios y consecuencias en la concreta situación presente.

TERESA MARZÁN

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE PARADOS, EN TASA ANUAL (%)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2015)

la sociedad, de manera que el bien común sea servido y no fagocitado. Por liberal que parezca, el bien común es servido por una competencia real en los terrenos político y económico, basada en una ley estrictamente igual para todos. La oligarquización que sufrimos en España va en la dirección contraria en ambos aspectos.

LA CALIDAD Y LA CANTIDAD DEL TRABAJO

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunta mensualmente en su encuesta por los tres principales problemas de España. En septiembre de 2015, un 78,6% de los encuestados mencionó el paro entre esos tres problemas; en el segundo asunto más nombrado (la corrupción y el fraude), solo concurrieron el 39,5% de las respuestas, la mitad.

El paro tiene unos costes económicos muy altos para la sociedad. Por una parte, debe financiarse el seguro de desempleo y alguna forma de asistencia social para los parados de larga duración que han perdido la cobertura de ese seguro. Al mismo tiempo, quien no trabaja no puede contribuir a la Seguridad Social. Aunque el Estado contribuya por él en algunos casos, eso solamente traslada el problema financiero a las cuentas públicas. La lógica de fondo permanece: la Seguridad Social se alimenta del producto del trabajo de sus participantes; sin empleo, el sistema pierde su sentido de seguro colectivo.

Hay, además, importantes efectos culturales del paro. Los jóvenes no encuentran trabajo pese a haber estudiado. Las “prácticas” se eternizan enganchándose unas a otras, sin salario o con salarios muy bajos. Los muchachos más capaces sienten que

pueden conseguir trabajo en otros lugares y emigran. Las personas por encima de 45 años resultan mal “empleables”, porque en el mercado hay mucha gente joven con pocas responsabilidades familiares, dispuesta a trabajar por muy poco.

Tanto la estabilidad como la integración social se resienten. Aunque están empezando a aparecer trabajadores pobres, una categoría hasta hace poco inexistente, la inserción en la sociedad española sigue ocurriendo básicamente por el empleo. Quien no encuentra empleo ve aumentar radicalmente su riesgo de exclusión. Además, si abandonas o pierdes un empleo, tienes grandes dificultades para encontrar otro; como consecuencia, no buscas el lugar más adecuado a tus capacidades, donde podrías rendir más, sino que te aferras a cualquier cosa. El miedo a perder el empleo disminuye la capacidad de negociación del trabajo frente al capital, y convierte la seguridad en el principal valor para los jóvenes trabajadores; de hecho, para toda la sociedad.

Por el lado de quienes consiguen trabajo, la precariedad no permite poner las bases de estabilidad

económica que se precisan para fundar una familia, de manera que constituye uno de los ingredientes principales de la crisis demográfica: cómo tener y criar hijos si no sé si dentro de un año estaré trabajando y con qué sueldo. Por otra parte, también el número de hijos que se querría tener disminuye: si los jóvenes no tienen trabajo y ven difícil su inserción laboral, para qué añadir un parado más.

El paro está disminuyendo en España, y eso se nota en una mejoría no espectacular –pero palpable– del ambiente económico: no solo los grandes números, sino también el tiempo que se tarda en alquilar un piso, el número de clientes que tienen los taxistas, etc. Cualquiera que pretenda participar en el próximo gobierno deberá explicar cómo va a hacer para que esa tendencia se mantenga. Los niveles actuales de paro, por encima del 20%, tienen terribles efectos disolventes en el medio plazo para cualquier sociedad.

En la respuesta al paro concurren dos elementos, uno de corto plazo y otro de largo. A corto plazo, las modificaciones han ido, sobre todo, en una dirección durante estos años: disminuir el coste real de cada trabajador para quien le emplea. Es un asunto básico de economía: si baja el precio de un factor de producción, sube la cantidad demandada de él.

Más ampliamente, a corto plazo tiene sentido intentar crear un “clima favorable a los negocios” que conduzca a las empresas ya establecidas y a los capitales nacionales o extranjeros a invertir en España, de manera que aumente la producción y se requieran más trabajadores para generarla. Bajar los

Duran i Lleida, candidato de Unió





Albert Rivera, candidato de Ciudadanos

precios del trabajo o los impuestos a las empresas puede ser uno de los caminos para generar ese “clima favorable a los negocios”, pero hay muchas otras medidas posibles que no son laborales ni fiscales.

Algunas constituyen mejoras de eficiencia neta. Por ejemplo, con poco dinero y una estructuración menos fragmentaria de los juzgados, podría conseguirse que los juicios se resolvieran mucho más rápido. Eso es esencial para la buena marcha de los negocios, que envuelven a menudo pleitos mercantiles, laborales, administrativos, etc. Las políticas que buscan crear mercados cada vez más amplios (evitando la ruptura del mercado nacional con normas diferentes para cada región, fomentando la ampliación de la Unión Europea, facilitando las comunicaciones para tecnología, factores de producción y productos, etc.) también contribuyen a un “buen clima para los negocios”. En última instancia, si mejoramos las condiciones de éxito de las empresas, tendremos más probabilidades de que inviertan en España y generen puestos de trabajo aquí.

EL TRABAJO A LARGO PLAZO

A largo plazo, la situación resulta más difícil de discernir. Probablemente, estamos ante una oleada tecnológica basada en la inteligencia artificial, que generará crecimiento del producto y de los beneficios con igual o menos empleo de trabajo humano. Buena parte del esfuerzo, no solo “bruto” sino también “inteligente”, lo harán máquinas, o los mismos clientes utilizando máquinas. Así ocurre ahora cada vez que compramos un

Eficiencia y redistribución

A la hora de evaluar las propuestas concretas, importa notar si buscan aumentar la eficiencia en el manejo de los bienes públicos o realizar una redistribución de los mismos.

Aumentar la eficiencia significa producir más bienestar con los mismos recursos sin que ningún interés legítimo salga perdiendo. Solo los intereses ilegítimos pueden perder, por ejemplo, con la reducción del fraude fiscal. Realizar una redistribución implica producir más bienestar para unos grupos sociales a costa de un menor bienestar (relativo) para otros. En nuestra sociedad suele decirse a menudo: “Aumentaremos el bienestar de los pobres cobrando más impuestos a los ricos”. La redistribución contraria también se hace, pero no se dice tanto. El caso es que eficiencia y redistribución están relacionadas. Si la distribución es muy desfavorable a los que tienen más, estos tienden a irse con su capital (financiero, humano, social...) a otra parte, y la eficiencia de la economía en conjunto disminuye. Pero si la distribución es muy desfavorable a los que tienen menos, estos carecen de la capacitación y las oportunidades para desarrollar sus fuerzas productivas, y la eficiencia de la economía en conjunto también disminuye. Así pues, entre eficiencia y redistribución, se trata de alcanzar un equilibrio virtuoso que permita a todos contribuir a la economía común, producir con eficiencia y beneficiarse del producto.

billete aéreo por Internet, cada vez que resolvemos nuestros asuntos bancarios delante de un ordenador o en un cajero automático.

El viejo temor de una revolución tecnológica que destruyera más empleos de los que crea puede estar haciéndose real por primera vez. Esa posibilidad viene denunciándose desde la primera revolución industrial en el siglo XVIII, cuando los luditas destruían las máquinas textiles porque volvían obsoletos a los artesanos del ramo. Pero, una y otra vez, se mostró que se trataba de una “destrucción creadora”, donde se generaban más empleos en otros modos y sectores de trabajo por efecto de la misma revolución tecnológica. Tal lógica puede estar rompiéndose ahora por primera vez, para tener una revolución productiva con destrucción neta de empleo.

Si describimos correctamente la tendencia, a la hora de votar es necesario prestar atención a algunos aspectos estructurales en torno al trabajo:

1. El desplazamiento de los empleos hacia aquellos sectores que consisten en la atención a personas y requieren contacto humano: educación, salud, turismo, marketing..., de forma que la primera pregunta para la supervivencia de un tipo de empleos es si las personas lo harán mejor que máquinas sofisticadas. La empatía es una imprecisa ventaja comparativa que las máquinas encontrarán muy difícil emular.

2. El reparto de las horas trabajadas en empleos altamente productivos, de manera que el número de horas de cada empleado –y la correspondiente remuneración– disminuya, a cambio de más tiempo para desarrollar otros intereses y una sociedad en que más personas tengan oportunidad de trabajar.

3. El ajuste de la educación hacia los sectores donde el sujeto no pueda ser fácilmente reemplazado. Ello incluye dar prioridad a las capacidades empáticas, de inteligencia colectiva y del conocimiento capaz de diseñar y controlar máquinas. Esa reforma implicaría apuntar muy alto en materia de educación.

4. La inserción social de las personas no solo o principalmente a través del trabajo, sino también a través de algún tipo de renta

ciudadana universal, financiada por impuestos sobre los beneficios de una economía de alta productividad pero baja generación de empleos.

La primera es una propuesta de mercado, que va a ocurrir por la lógica económico-tecnológica del momento. La segunda es una propuesta, sobre todo, para la negociación entre sindicatos y patronal. La tercera y la cuarta son asuntos principalmente del Estado, que, sin embargo, requerirían gran apoyo social para hacerse políticamente viables.

No se trata de elegir entre esas propuestas (podría pensarse en combinaciones compatibles y sinergias mutuas), sino de examinar cada programa en materia de empleo, apreciando cuánta visión de largo plazo contiene, hasta qué punto considera que los problemas del futuro requerirán soluciones distintas al pasado. Atornillarse en las soluciones del pasado –un conservadurismo que se encuentra tanto a la derecha como a la izquierda– puede resultar especialmente suicida en materia laboral.

LA COHESIÓN SOCIAL Y LA SOLIDARIDAD

La solidaridad consiste en vivir juntos: poner en común un porcentaje de lo que cada uno produce y con ello generar bienes, servicios y prestaciones que construyan la ciudadanía común y atiendan algunas situaciones de necesidad. Servicios específicos para los niños, los enfermos, los dependientes, los jubilados, los



Pablo Iglesias, de Podemos

parados..., pero también seguridad social, orden, defensa, justicia, infraestructuras, representación internacional, etc., para todos.

El canal político principal para la solidaridad, en este momento, es el Estado, que recauda impuestos, tasas y contribuciones, y con esos recursos produce bienes, servicios y prestaciones a través de las que genera tanto adquisiciones compartidas como redistribución de recursos. Hay otros canales extra-familiares relevantes, pero de volumen mucho menor.

La solidaridad transcurre de manera muy distinta dentro del Estado nacional y fuera de él. Los habitantes de España compartimos a través del Estado más o menos el 45% del producto; con los otros países de la Unión Europea, el 1%; en la solidaridad con el resto del mundo, menos del 0,2%.

El pensamiento cristiano nos dirige incondicionalmente en la dirección de mayor solidaridad, de una comunidad global. No se trata, pues,

de reducir el 45% para que se vuelva un 1%, ni el 1% para que se acerque al 0,2%, sino exactamente al revés. Si el 45% de vida económica en común nos parece una proporción razonable, que todavía deja el 55% para la iniciativa individual, entonces la lógica cristiana consiste en movernos hacia el 45% en común con todas las personas del mundo, no solo con nuestros paisanos. Estamos obviamente muy lejos, y eso no se va a alcanzar con unas elecciones generales, pero el sentido del movimiento sí es relevante para el discernimiento del voto: damos un pasito en esa dirección, o en la contraria.

Además, los problemas que afectan cotidianamente a las personas cada vez corresponden en mayor medida a dinámicas globales que no controlamos desde el Estado nacional. Movernos hacia una mayor solidaridad global implica también movernos hacia una mayor capacidad de acción política conjunta, de manera que nuestras riendas políticas sean capaces de embridar el

Pasado y futuro

Una diferencia de estas elecciones con la mayoría de las anteriores estriba en que la corrupción se ha vuelto un tema importante en la decisión de muchos votantes. La encuesta del CIS que mencionamos en el texto principal (p. 26) apunta a “fraude y corrupción” como el segundo problema que más preocupa a los españoles. En elecciones anteriores, la parte menos ideológica del voto se focalizaba en lo simpático que pudiera resultarles

al elector cada candidato. Eso tiene una lógica, porque, al fin y a la postre, votamos a la persona más que al programa. En política hay un elemento básico de confianza personal, de liderazgo, que resulta imposible de reducir a un contrato electoral sobre el programa, como si compráramos una batidora. En estas elecciones caemos en la cuenta de que, más allá del programa y del carisma personal de cada político, también

importan los compromisos adquiridos por él y su partido con intereses oligárquicos, clientelas a las que han concedido contratos y subsidios, a menudo fuera de la ley. Eso marca una diferencia nueva en estas elecciones: quien lleva mucho tiempo en el poder (en diversos poderes nacionales, autonómicos y/o locales) puede encontrarse atrapado por hechos y compromisos del pasado, con los que le resulta imposible romper sin

provocar un aluvión judicial en su contra. Quien no ha ocupado poder hasta ahora tampoco ha tenido tiempo de tejer redes de intereses bastardos ni de quedar atrapado en ellas. Para estos grupos y candidatos, la evaluación electoral puede hacerse más en base al futuro que se espera de ellos, que a su pasado. A los otros, es inevitable preguntarles, además, cómo han manejado los casos de corrupción masiva en sus filas. El pasado habla del futuro.

potro de las cuestiones económicas, demográficas y ecológicas globales, en este momento fuera de control.

El pensamiento católico nos fuerza a pensar en términos de una convivencia global. Pero, además, experimentamos problemas de integración social a escala nacional. Aunque la solidaridad interna resulta un valor raramente discutido en nuestra sociedad, hay movimientos –algunos sociológicos y otros políticos– que apuntan en la dirección de la fractura de esa solidaridad, creando esferas de vida separadas donde los afortunados no se encuentren con los demás, hasta el punto (piénsese en los *homeless*, en los inmigrantes irregulares o, menos dramáticamente, en los minusválidos) de la invisibilidad. La solidaridad no se discute en teoría, pero sí en la práctica.

A la hora de decidir un voto católico, algunas solidaridades internas son muy importantes:

1. La solidaridad entre clases y grupos sociales, en virtud de la cual quienes más producen o más tienen contribuyen en mayor medida para que otros obtengan prestaciones y oportunidades suficientes.

2. La solidaridad generacional, por la que los servicios recibidos por las generaciones en edades menos productivas –como educación, salud o jubilaciones– son financiados por las contribuciones de las generaciones más productivas.



Andrés Herzog,
candidato de UPyD

3. La solidaridad entre los territorios, por la que los lugares donde se encuentran más personas de rentas más altas y donde se realiza más comercio contribuyen al desarrollo de otros territorios de menos riqueza.

El ideal de la solidaridad consiste en acabar con todas las razones de la pobreza. La pobreza que nos importa debe ser bien entendida: no primero a partir de lo que se posee (pobre es el que no tiene lo necesario), sino de lo que se es capaz de producir (pobre es el que, por una u otra razón, no puede producir lo necesario). Solo si la incapacidad de producir resulta insuperable por alguna razón (la edad, por ejemplo), el segundo concepto coincidirá con el primero. Si es superable, como ocurre con el paro, acabar con la pobreza no es dar para que la persona tenga al menos el mínimo, sino poner a su alcance la oportunidad para que pueda producir al menos el mínimo. Dicho con otras

palabras: pobreza no es primero carencia, sino exclusión, y el fin de la pobreza no consiste primero en la asistencia, sino en la inclusión. Cómo proponen avanzar en inclusión resulta un punto fundamental para evaluar los programas electorales desde el punto de vista católico.

Las diversas solidaridades generan cohesión social. Basta echar una mirada a sociedades como las latinoamericanas o la sudafricana para notar la escisión social cuando algunas solidaridades básicas no funcionan. Ese es un riesgo también en España, que la crisis ha venido a acentuar. El desempleo, la degradación del trabajo y la libertad de movimiento de los capitales amenaza con dividir a la sociedad española en dos sectores comunicados desde el punto de vista de la producción: los capaces de participar en una economía de alto rendimiento y los que apenas saben hacer nada, relegados a empleos basura o al paro. Hay también riesgo de que, en materia de educación y salud, acabe produciéndose una división entre pobres servicios públicos para los pobres, y servicios privados de mejor calidad para las clases medias y superiores.

Como vimos anteriormente, la cuestión demográfica amenaza la sostenibilidad económica de mecanismos básicos de solidaridad intergeneracional, en particular los basados en la seguridad social. Y, finalmente, los movimientos secesionistas de regiones ricas apuntan a romper la solidaridad entre los territorios.

Así que tiene sentido preguntarle a cada uno de los programas electorales cómo piensa garantizar en la práctica el buen funcionamiento de la solidaridad en la vida española, de forma que ningún grupo, ninguna



Pedro Sánchez,
candidato del PSOE

generación y ningún territorio queden fuera de una integración social básica, que les permita aportar al conjunto en la medida de sus fuerzas y recibir en proporción a sus necesidades.

LA LIBERACIÓN CULTURAL EN LA SOCIEDAD DE CONSUMO

Un problema más de fondo, que no se va a decidir en estas próximas elecciones, estriba en que nuestro sistema económico invierte precisamente el orden de los objetivos respecto a lo que el pensamiento cristiano (y el sentido común) aconsejarían.

En ese orden deseable, la economía existe para sustentar materialmente proyectos individuales y colectivos humanizadores, utilizando el indudable atractivo del beneficio como un medio para ello. Los proyectos humanos, a su vez, podrían ser tan variados como las personalidades individuales y las diferentes culturas, pero habrían de tener algunos elementos básicos en común: un respeto razonable a la naturaleza que asegurara la sostenibilidad a largo plazo, unos mínimos garantizados de protección de los derechos humanos más básicos, seguridad económica y social suficiente para que todos pudieran hacer planes de vida como los requeridos para establecer una familia, oportunidades para que todos contribuyeran a la construcción social de la vida, el tiempo y la calma para entrar en la dimensión contemplativa de las relaciones con otras personas, Dios incluido... No son muchas cosas, pero sí muy importantes.

La economía que tenemos, por el contrario, está montada sobre el beneficio empresarial como fin último ("el negocio de General Motors no es hacer coches, sino dinero"). Si ello significa sacrificar el medio ambiente, incluso los derechos humanos básicos en ciertos lugares del Tercer Mundo, se acaba haciendo. Si implica prescindir de trabajadores y precarizar el empleo, porque las máquinas resultan más rentables, también se procede a ello aunque imposibilite a mucha gente la estabilidad vital necesaria para consolidar una familia. Y si para lograr más beneficio es preciso un ruido comercial ensordecedor que mueva al público a comprar, y luego

Aunque estemos comprometidos personalmente con alguna causa (la educación, la salud, la ecología, la protección de la vida no nacida, la solidaridad con los pobres, las misiones...), los cristianos no somos sujetos temáticos. Nuestras decisiones electorales deben buscar los mejores equilibrios posibles de conjunto. El compromiso con una determinada causa puede llevarnos a conocer mejor ese aspecto de la realidad, a darle más importancia, pero no debe volver nuestro

a endeudarse para comprar aún más, y luego a trabajar más horas para pagar las deudas, robando el tiempo a la contemplación en las relaciones, pues eso sucede finalmente por la lógica de la competencia.

Y esa lógica dice: lo hago aunque no me gusta, porque, si no, lo hará en mi lugar otro más inescrupuloso. La calidad moral de la economía será la misma, pero yo habré perdido la competencia y fracasado en el sistema, quizás incluso habré quedado en el paro o mi empresa habrá quebrado.

Evidentemente, la solución es política: la competencia tiene lugar en un marco de reglas iguales para todos, que protegen los bienes básicos para la sociedad. Se compete a partir de esas reglas, que deben ser puestas por el Estado. Pero el problema, el gran problema, es que

Causas y totalidad

voto un maximizador de los valores y los principios que se juegan en él, ignorando los demás o negándoles peso. El peligro consiste en considerar como radicalmente injusta cualquier posición opuesta a la que defendemos en nuestra "causa". Entonces, sobre ello nos volvemos electoralmente intransigentes: quien proponga "lo malo" en ese preciso aspecto de nuestra inquietud debe ser descartado sin más averiguar. No es una buena idea.

La perfección que los principios reflejan –incluso el de justicia– puede servirnos como baremo para medir diferentes aspectos de diferentes opciones: se proponen avanzar más deprisa, más despacio o incluso retroceder en un cierto campo. Pero hemos de considerar todos los campos en que hagan propuestas. Cabe ser intransigente en los principios y realista en el voto, buscando la mejor combinación posible de principios y consecuencias esperadas.

tenemos un mercado global con Estados nacionales, incapaces por su misma constitución territorial de establecer reglas mínimas globales.

Podría parecer que, como criterio para decidir el voto, lo que decimos en este epígrafe resulta contradictorio con lo que señalamos, por ejemplo, al hablar del empleo. Es verdad. Nuestra sociedad debe tener éxito en el mundo que hay, no en otro. Y, al mismo tiempo, debe comprometerse con cambiar el mundo que hay para hacer otro. El cristianismo es tensión y paradoja desde sus mismos comienzos con un Dios ejecutado. El grado en que esa tensión sea reconocida en los programas políticos, que no les "guste" demasiado el mundo actual, pero al mismo tiempo no nos conduzcan al fracaso en él, resulta también relevante a la hora de decidir el voto.

Alberto Garzón, de IU-UP

